

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Auto Interlocutorio No. 500

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
RADICACIÓN:	76001-33-33-001-2019-00180-00
DEMANDANTE:	ALDEMAR BORJA RIVAS
DEMANDADO:	NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y MUNICIPIO DE PALMIRA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

1. ASUNTO A DECIDIR

En principio, debe indicarse que la parte demandada **Nación – Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional** no contestó la demanda, de conformidad con la constancia obrante en el expediente digital.

Así mismo, se precisa que, el **municipio de Palmira**, contestó la demanda de manera oportuna y, junto con la contestación presentó excepciones.

De las excepciones formuladas se corrió traslado el día 23 de agosto de 2021, conforme se vislumbra de la constancia secretarial obrante en el anexo nro. 14 del expediente digital.

Con la entrada en vigencia de la ley 2080 de 2021 se introdujeron modificaciones en el proceso contencioso administrativo que afectan el trámite de las excepciones previas y que conllevan a que su resolución se efectúe con anterioridad a la realización de la audiencia inicial.

La Jurisprudencia del Consejo de Estado¹ al referirse a la entrada en vigencia de la ley procesal señala que “la misma resulta de aplicación inmediata y prevalece sobre las anteriores, a partir de su entrada en vigencia o de la fecha de su promulgación, conforme lo establece el artículo 40 de la Ley 153 de 15 de agosto de 1887 , el cual prevé que “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir”.

A su turno el artículo 86 de la ley 2080 de 2021 estableció su régimen de entrada en vigencia bajo los siguientes parámetros:

¹ C.E., Sección Primera. Exp. 66001-23-33-000-2017-00474-01. 08/03/2018. C.P. María Elizabeth García González.

“ARTÍCULO 86. RÉGIMEN DE VIGENCIA Y TRANSICIÓN NORMATIVA. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.

Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos [218](#) a [222](#) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.

De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo [624](#) del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley [1437](#) de 2011.

En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.”

En este contexto, frente al trámite de las excepciones previas, el artículo 38 de la ley 2080 de 2021 que modificó el artículo 175 del CPACA en su parágrafo 2 consagra lo siguiente:

“PARÁGRAFO 2o. De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo [201A](#) por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos [100](#), [101](#) y [102](#) del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo [101](#) del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo [182A](#).”

Con base en los anteriores parámetros, atendiendo los postulados del principio de aplicación inmediata de la ley procesal y teniendo en cuenta que en el caso concreto el término de traslado se encuentra debidamente agotado, se procederá a resolver las excepciones previas de acuerdo a lo estipulado en el numeral 2° del artículo 101 del Código General del proceso, esto es, mediante providencia antes de la audiencia inicial.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Excepciones formuladas por la parte demandada municipio de Palmira.

2.1.1. Excepción previa Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales – Indebida representación de la parte demandante.

La apoderada judicial de la entidad accionada **municipio de Palmira**, al momento de contestar la demanda expuso que, el poder especial obrante en la página 34 no cumple con los requisitos, toda vez que en su contenido se indica que quien esta otorgando poder es una persona diferente a la parte demandante “AMPARO HURTADO OROBIO” y, en el presente caso, el demandante es el señor **Aldemar Borja Rivas**.

Aunado a ello, indicó que en el referido documento, dentro de las entidades demandadas no se encuentra el **municipio de Palmira** y se encuentra dirigido al Tribunal Administrativo del Circuito de Buenaventura y no, a los Juzgados Administrativos del Valle del Cauca.

Realiza una transcripción literal del art. 160 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 74 del Código General del Proceso, así como, de una providencia que adujo ser emanada del Honorable Consejo de Estado, sin embargo, la misma no es identificada en el mentado escrito.

Por consiguiente, consideró que el poder adolece de los requisitos contemplados en la norma, así como lo indicado por el Consejo de Estado, pues el nombre e identificación de la parte demandante es de una persona diferente, así mismo, no se encuentra identificación del extremo de la Litis municipio de Palmira y, finalmente no se encuentra dirigido al Juzgado Administrativo del Circuito-.

Ahora bien, de conformidad con el numeral 5° del artículo 100 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la excepción previa de ineptitud de la demanda se configura en el evento en que la misma no cumple con los requisitos formales o, en su defecto, cuando se genera una indebida acumulación de pretensiones.

En este sentido, el Consejo de Estado ha sido enfático en precisar que la mentada excepción, solo atañe a los requisitos formales de la demanda o a la indebida acumulación de pretensiones de la siguiente manera:

“Antes de abordar el estudio del problema jurídico propuesto, se deben realizar algunas precisiones preliminares sobre la denominada «ineptitud sustantiva de la demanda». Al respecto esta subsección ha señalado que con anterioridad se ha hecho alusión a esta figura como si se tratara de una excepción previa o causal de rechazo

de la demanda y en últimas, como sustento de decisiones inhibitorias, lo cual constituye una imprecisión¹.

Ello, toda vez que sólo es viable proponer y declarar próspera la excepción previa de «ineptitud de la demanda por la falta de cualquiera de los requisitos formales» o «por la indebida acumulación de pretensiones» y; en relación con otras situaciones, se debe acudir a las demás excepciones previas previstas en el artículo 100 del Código General del Proceso, sin que haya vocación para realizar una denominación en términos diferentes a los señalados por la ley.

Así mismo, se recalcó que al encontrarse otras falencias que otrora han servido como sustento para la declaratoria de una «ineptitud sustantiva de la demanda», en lugar de acudir a esa denominación, se deben utilizar las herramientas que los estatutos procesales prevén para tal efecto, tal como se analizó extensamente en el auto en cita, esto es, aquellos mecanismos de saneamiento como por ejemplo ordenar corregir la demanda o dejar sin efecto el auto admisorio para proceder al rechazo de la misma en atención a la causal legalmente prescrita para el efecto²”.

De conformidad con lo indicado, los requisitos formales de la demanda son taxativos (artículos 162 y 166 de la Ley 1437 de 2011), por lo que no se le podrá exigir al demandante otras cargas distintas a las establecidas en la ley.

Bajo este contexto, en el caso que hoy ocupa la atención del despacho, la apoderada judicial del municipio de Palmira manifestó que debe prosperar la excepción de «inepta demanda» en razón a que la parte actora no cumple con el requisito establecido en el artículo 160 de la Ley 1437, pues en su sentir:

-. Quien confiere poder “**AMPARO HURTADO OROBIO**” no resulta ser la parte demandante **Aldemar Borja Rivas**.

-. En el poder no se encuentra incluida en calidad de demandado el municipio de Palmira.

-. El poder se encuentra dirigido al Tribunal Administrativo, entidad diferente a los Juzgados Administrativos del Circuito de Cali.

Acorde con lo indicado por el Tribunal de Cierre de lo Contencioso administrativo, lo consignado en la normatividad y lo expuesto por el ente territorial, debe indicarse que la falta del derecho de postulación no debe analizarse a la luz de la excepción de inepta demanda. Ello, si se tiene en cuenta que, el numeral 4° del artículo 100 del Código General del Proceso trae consigo otra excepción denominada “*Incapacidad o indebida representación del demandante o demandado*”.

Así las cosas, a la luz de dicha excepción se debe analizar en el caso bajo estudio, si el poder arribado por la parte actora cumple o no, con la exigencias del artículo 160 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con los artículos 73 y 74 del Código General del Proceso; normas que precisan que, cuando se confiere poder especial para actuar judicialmente, el mismo debe estar contenido en un documento privado y, adicionalmente, los asuntos en él deben estar determinados y claramente identificados.

² Auto del 26 de septiembre de 2019, proferido dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2015-02179-02(4465-17)

Con relación al derecho de postulación, el Honorable Consejo de Estado en providencia del año 2018³, expresó lo siguiente:

“ Dichas acciones se diferencian, entre otros, en los siguientes aspectos: En cuanto a la titularidad de la acción, se observa que la de nulidad es una acción popular, abierta a todas las personas, cuyo ejercicio no necesita del ministerio de un abogado; en tanto que el uso de la acción de nulidad y restablecimiento está condicionado a la existencia de un interés, de manera que podrá ejercerla quien considere que su derecho ha sido lesionado y es necesario para tal efecto el apoderamiento de un profesional del derecho;.. [...].” (Subraya el Despacho).

Ahora bien, analizado el poder obrante en el expediente, arribado por la parte actora dentro del asunto de la referencia, se advierte lo siguiente:

-. Si bien en el encabezado del poder el apoderado judicial incurrió en error en determinar en calidad de poderdante a la señora “**AMPARO HURTADO OROBIO**”, lo cierto es que de manera subsiguiente, se hace alusión a los actos administrativos demandados, los cuales conciernen sobre el derecho que le asiste al señor **Aldemar Borja Rivas** al percibir las cesantías definitivas y su correspondiente sanción mora.

-. Aunado a ello, la persona que confiere poder al final del documento a través de su firma, es el señor **Aldemar Borja Rivas** ante el Notario 8 del Círculo de Cali y, no la señora Amparo Hurtado Orobio.

-. La demanda y sus correspondientes anexos, hacen alusión al problema suscitado entre el demandante señor **Aldemar Borja Rivas** y la **Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio**, junto con el **municipio de Palmira**.

En este orden de ideas, se procederá a declarar no probada la excepción previa de “*indebida representación del demandante*” formulada por el representante judicial de la entidad accionada **municipio de Palmira**, al advertirse que el señor **Aldemar Borja Rivas**, se encuentra representado en debida forma a través de apoderada judicial para actuar en el extremo activo del litigio.

2.1.2. Excepción perentoria de falta de legitimación en la causa por pasiva y prescripción.

La apoderada judicial de la parte demandada, **municipio de Palmira**, formuló la excepción perentoria de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto a la entidad que representa, al considerar que de conformidad con el artículo 91 de 1989, artículo 180 de la Ley 115 de 1994 y el Decreto 3752 de 2003, es el **Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio**, quien se encuentra en la obligación de atender las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados.

Igualmente, formuló la excepción de prescripción trienal, al tratarse de una prestación económica de carácter laboral.

Por tanto, debe indicarse que el Despacho no hará pronunciamiento alguno en este momento procesal de fondo y su resolución será diferida hasta el momento de dictar

sentencia, toda vez que los argumentos expuestos por la entidad accionada municipio de Palmira se relacionan con el fondo del asunto.

2.1.3. Excepción perentoria de caducidad

La apoderada judicial de la entidad accionada, **municipio de Palmira**, al momento de contestar la demanda formuló la excepción de caducidad del presente medio de control al considerar que se pretende la nulidad del oficio No. 1151.6.1.1062 del 20 de noviembre de 2018 y la nulidad parcial de la Resolución No. 200.13.3-0806 del 14 de febrero de 2019, actos administrativos que se encuentran en firmes y debidamente ejecutoriados y sobre los cuales, no se acudió ante la jurisdicción dentro del término legalmente establecido.

En principio, debe indicarse que el presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho está contemplada en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así:

“Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. (...)”

Por lo tanto, quien se halle afectado por un acto administrativo, podrá interponer demanda a través del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, para que se declare la ilegalidad de tal acto y se restituyan sus derechos; teniendo en cuenta el término para incoar la misma y para el caso que nos ocupa, es de cuatro (4) meses, tal como lo dispone el literal d) del artículo 164 ibídem, que expresa:

*“d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de **cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo**, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales...”*

En los términos del artículo 3° del Decreto 1716 de 2009, el término de caducidad del presente medio de control, puede suspenderse con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los Agentes del Ministerio Público, hasta: a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, b) Se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2° de la Ley 640 de 2001, c) Se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud; **o lo que ocurra primero.**

Teniendo en cuenta la anterior normatividad y descendiendo al caso concreto, el Despacho reitera que en el presente asunto no se configura el fenómeno jurídico de la caducidad, por los siguientes argumentos:

La parte demandante pretende la nulidad de los siguientes actos administrativos:

-. Resolución nro. 200.13.3-0806 del 14 de febrero de 2019, por el cual se reconoció el pago del ajuste a la cesantía definitiva en favor del señor Aldemar Borja Rivas, correspondiente a los años 1996, 1997, 1999 y 2014.

-. Del oficio nro. 1151.6.1.1062. del 20 de noviembre de 2018, proferido por el Municipio de Palmira, frente a la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas causadas en el año 1996, 1997 y 1999.

-. Acto ficto o presunto configurado el 29 de noviembre de 2018, proferido por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio frente a la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas causadas en el año 199 y las que han ocasionado el incumplimiento de la consignación anualizada de las cesantías, es decir, 1996, 1997, 1999 y 2014 en el respectivo fondo. Así mismo, negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria derivada del incumplimiento en la consignación anualizada de las cesantías.

Así entonces, el termino de cuatro (04) meses de que trata el literal d) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, para presentar la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, fenecían el **15 de junio de 2019**; sin embargo, la parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial (09 de enero de 2019), la cual suspendió los términos hasta el 28 de febrero de 2019, fecha en la cual se declaró fallida la diligencia.

En este sentido y como quiera que la demanda fue presentada el día 09 de abril de 2019, según el acta de reparto que obra en el respectivo expediente digital, debe concluirse que, la demanda de la referencia se interpuso en forma oportuna, motivo por el cual se procederá a declarar no probada la excepción de caducidad propuesta por la apoderada judicial de la entidad accionada, municipio de Palmira.

Por otro lado, respecto al oficio nro. 1151.6.1.1062 del 20 de noviembre de 2018, se dispondrá lo propio de manera posterior.

2.2. Excepciones previas advertidas de oficio por este Estrado Judicial.

2.2.1. Excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por pretender la ejecución de un acto administrativo, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Una vez es revisada la demanda, junto con sus pretensiones y sus anexos, se puede advertir que:

-. Se solicita la nulidad de la Resolución nro. 200.13.3-0806 del 14 de febrero de 2019, por el cual se reconoció el pago del ajuste a la cesantía definitiva en favor del señor Aldemar Borja Rivas, correspondiente a los años 1996, 1997, 1999 y 2014.

-. Así mismo, en las pretensiones de la demanda a título de restablecimiento del derecho, se puede evidenciar la petición particular de **pago frente a un reconocimiento de un ajuste de cesantías definitivas** por el valor de \$3.717.315 de los años 1996, 1997, 1999 y 2014, que realizó el **municipio de Palmira** a través del acto administrativo contenido en la resolución nro. 200.13.3-0806 del 14 de febrero de 2019.

-. Dicho ajuste de cesantías ya se encuentra reconocido por la Administración municipio de Palmira, sin embargo, como a la fecha el mismo no ha sido cancelado, requieren que este Despacho Judicial ordene su correspondiente desembolso.

Ahora bien, en relación con la excepción de inepta demanda, el Consejo de Estado, mediante auto de 24 de enero de 2019⁴, indicó que:

“(...) [S]olo puede declararse probada la excepción previa de «ineptitud de la demanda», cuando esta no cumple cualquiera de los requisitos formales consagrados en los artículos 162 y 166 del CPACA o en el evento en que exista indebida acumulación de pretensiones. [...] «Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión». [...] De esta manera, el juez de lo contencioso administrativo únicamente puede estudiar y declarar probada esta excepción cuando se configure alguno de estos supuestos. Las demás situaciones que se presenten deben ser examinadas de acuerdo con las otras excepciones previstas (...)”.

En consideración a lo anterior, para esta juzgadora, la pretensión antes referida constituye una solicitud de ejecución de un acto administrativo, el cual trae consigo una obligación clara, expresa y exigible, por lo que a la luz de lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 297 de la Ley 1437 constituye un título ejecutivo, susceptible de demandarse ejecutivamente.

Así las cosas, dicha pretensión de pago no es susceptible de ser controvertida a través del presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sino mediante el proceso ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria. Ello, por cuanto la Jurisdicción administrativa sólo conoce de los ejecutivos que se deriven de condenas impuestas, conciliaciones aprobadas por la jurisdicción, laudos arbitrales y los originados en los contratos celebrados por las entidades públicas⁵.

En consideración a lo anterior, se configura entonces la inepta demanda por una indebida acumulación de pretensiones en el presente asunto, en atención a lo previamente expuesto.

En consecuencia, continúese el trámite del presente medio de control frente a las demás pretensiones.

2.2.2. Excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por enjuiciarse acto no susceptible de control judicial.

Aunado a lo anterior, resulta igualmente evidente que el acto administrativo de trámite contenido en el oficio nro. 1151.6.1.1062. del 20 de noviembre de 2018, proferido por el **municipio de Palmira**, no resulta ser un acto administrativo de fondo susceptible de control por parte de esta jurisdicción, si se tiene en cuenta que aquel, se limita a informarle a la doctora **Angélica María González** sobre el trámite dado a la solicitud de ajuste de cesantías, indicándole para el efecto que, iniciarían con la recopilación del documento necesario que exige la Fiduprevisora para el reconocimiento y pago del año que faltaba para el ajuste de sus cesantías.

⁴ Auto de 24 de enero de 2019. MP. RAFAEL FRANCISCO SUAREZ VARGAS. 50001-23-33-000-2013-00431-01 (0755-17).

⁵ Numeral 6º del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011.

En ese sentido, se trae a colación reciente decisión del Consejo de Estado⁶, por medio de la cual se reitera sobre los actos que son en efecto, susceptibles de control de legalidad por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así:

“Al respecto, se recuerda que únicamente las decisiones de la administración que concluyen un procedimiento administrativo o aquellas que afecten derechos o intereses o impongan cargas, sanciones y obligaciones que modifican o alteran situaciones jurídicas determinadas son susceptibles de control de legalidad por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de ahí que los que impulsan la actuación, y no otorgan alguna solución de fondo a las solicitudes de los administrados o aquellos que se limiten a dar cumplimiento a una orden judicial o administrativa, no son cuestionables por vía judicial”.

Así entonces, una vez es revisado el oficio mentado, se puede concluir que, no corresponde a un acto administrativo definitivo, pues de su contenido no se observa una manifestación de la voluntad de la administración dirigida a crear, modificar o extinguir la situación de la parte actora respecto del ajuste de las cesantías peticionadas o del reconocimiento de la sanción moratoria.

En consecuencia, ese acto administrativo contenido en el oficio nro. 1151.6.1.1062. del 20 de noviembre de 2018, no puede ser objeto de pronunciamiento judicial, puesto que se trata de un acto de simple comunicación, respecto del cual, por regla general, no procede el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo⁷.

En consecuencia, continúese el trámite del presente medio de control frente a la declaratoria de nulidad de los demás actos administrativos enjuiciados.

Finalmente, el Juzgado de conformidad con el previsto en el inciso final del párrafo 2º del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 100 del Código General del Proceso, dispone que no encuentra probada ninguna otra excepción de manera oficiosa, con la capacidad de enervar anticipadamente el procedimiento hasta ahora surtido.

En consecuencia, el **Juzgado Primero Administrativo Oral de Cali**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: TENER POR CONTESTADA LA DEMANDA por el **municipio de Palmira**, de conformidad con lo indicado de manera previa.

SEGUNDO: TENER POR NO CONTESTADA LA DEMANDA por la **Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio**, en atención a lo expuesto.

TERCERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción previa de *“Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales – Indebida representación de la parte*

⁶ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Decisión del 15 de julio de 2021, rad: 25000-23-42-000-2016-03319-00 (6158-19) Consejero Ponente: Cesar Palomino Cortes

⁷ Artículo 75. Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa.

demandante” formulada por el representante judicial de la entidad accionada, **municipio de Palmira**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: DECLARAR NO PROBADA la excepción perentoria de “*caducidad*” formulada por el representante judicial de la entidad accionada, municipio de Palmira, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: DECLARARA PROBADA DE OFICIO la excepción de “*ineptitud sustantiva de la demanda por pretender la ejecución de un acto administrativo, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho*” e “*ineptitud sustantiva de la demanda por enjuiciarse acto no susceptible de control judicial*”, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente decisión.

SEXTO: Continúese la demanda, frente a las demás pretensiones formuladas, en cumplimiento a lo consignado en la parte considerativa de la presente decisión.

SEPTIMO: DIFERIR hasta el momento de proferir sentencia, la resolución de las excepciones perentoria de falta de legitimación en la causa por pasiva y prescripción del **municipio de Palmira**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

OCTAVO: Una vez en firme la presente providencia continúese con el trámite procesal correspondiente.

NOVENO: RECONOCER PERSONERIA adjetiva a la doctora **ILEANA LISLEY GUAYDIA SALCEDO**, identificada con cédula de ciudadana No. 1.094.909.982 y con Tarjeta Profesional No. 223.069 del C.S. de la J., para actuar como apoderado judicial de la entidad demandada, **MUNICIPIO DE PALMIRA**, de conformidad con el memorial poder visible en el anexo nro. 06 del expediente electrónico del proceso.

DÉCIMO: De conformidad con lo previsto en el inciso 2° del artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, se **ADVIERTE A LOS SUJETOS PROCESALES** del presente asunto que deben enviar un ejemplar de todos los memoriales o actuaciones que realicen en el curso del proceso, a los canales digitales o correos electrónico de los demás sujetos procesales, simultáneamente con copia incorporada al mensaje de datos enviado a este Despacho judicial a través del correo de recepción de memoriales de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos: of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

UNDÉCIMO: Este juzgado de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 del CPACA, comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:

- ✓ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:**
Correo electrónico: adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: (2) 8962433
- ✓ **Ministerio Público – Procuraduría Judicial 57**
Correo electrónico: procjudadm57@procuraduria.gov.co
mecaicedo@procuraduria.gov.co

- ✓ **Radicación de procesos ordinarios:**
repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación memoriales:**
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación de tutelas y habeas corpus:** URL
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea>

Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son:

Teléfonos: (2) 896-24-12
(2) 896-24-11

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
JUEZ

SMD.

Firmado Por:

Paola Andrea Gartner Henao
Juez
Juzgado Administrativo
Oral 001
Cali - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **953118d3f7a23b9b04e8fe31542b42335f5a8d60b070de8f93dc68b6067f103d**
Documento generado en 13/10/2021 03:15:05 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>